

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Escrivá: "No es verdad que el futuro de las pensiones sea una ruina"

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
José Luis Escribá, presidente de la Autoridad Fiscal (Airef), organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, dejó ayer en evidencia a los catastrofistas que apuntan que el futuro de las pensiones va a ser dramático. "Eso no es verdad", dijo durante su comparecencia en el Congreso. "No es verdad", repitió en tres ocasiones. "Y al final afectamos a una parte de la población que ya por su edad está inquieta", alertó.

La preocupación por las pensiones registró el pasado marzo un aumento del máximo histórico, según el CIS. El barómetro revela que las prestaciones por jubilación son uno de los tres problemas más importantes para el 15,5% de los españoles, el doble que un mes antes.

"Me preocupa mucho, pero mucho, la sensación, y lo hemos visto en las encuestas del CIS, que se está trasladando a los pensionistas y a la sociedad en general de que hay un problema muy agudo a medio plazo de las pensiones. Que se va a mermar muy seriamente los ingresos de los pensionistas. Esto no está sustentado por el análisis", aseguró Escribá.

El presidente de la Autoridad Fiscal quiso echar un jarro de agua fría al tenso y, en ocasiones, crispado debate sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social. "Cuando uno mira las incertidumbres y mira los márgenes [presupuestarios] esto es razonable y manejable y no deberíamos crear una angustia innecesaria en toda la población", apuntó.

El ex jefe de estudios del BBVA deslizó que vincular las pensiones al IPC, como reclaman algu-

nos de los grupos políticos de la oposición, supondrá un aumento del gasto adicional del 0,7% del PIB en 2023, el equivalente a unos 9.000 millones más. Si la economía española sigue creciendo a ritmos parecidos a los de los últimos cuatro años, ese aumento del gasto público sería fácilmente absorbible. Escribá proyecta que el incremento adicional de las pensiones por ligar las prestaciones a la evolución de los precios equivaldrá a unos 18.469 millones de euros más.

Uno de los factores que explica la creciente inquietud por el futuro de las pensiones está en los estudios que han publicado instituciones nacionales (Banco de España) e internacionales (FMI), que alertan sobre las dificultades a las que se enfrenta el sistema de pensiones en España dentro de unas décadas. Por ejemplo, el FMI calcula que las pensiones perderán hasta un 30% de poder adquisitivo en 2050.

En este caldo de cultivo, los jubilados se han echado a la calle para protestar por la exigua subida, del 0,25%, que se les avecinaba este año y que les suponía per-



José Luis Escribá, presidente de la Airef, ayer en el Congreso. / C. A.

der poder adquisitivo. Los pensionistas han organizado manifestaciones multitudinarias en las últimas semanas. Ante la presión social, el Gobierno ha subido las prestaciones más bajas un 3%.

Escribá quiso ayer rebelarse contra este catastrofismo. "Lo que no entiendo, sinceramente no entiendo, es que cuando tenemos dificultades para hacer las previsiones del año que viene, al-

gunos hacen previsiones para 40 años", dijo en el Parlamento. Y prosiguió: "Cuando uno va entrando en qué hay detrás de cada hipótesis, te das cuenta de que la incertidumbre (de los resultados) es considerable, y cuando ocurre esto me parece que no hay derecho de transmitir esta certidumbre, esta soberbia gnóstica con la que decimos esto va a ser la ruina. Porque esto no es verdad, no es ver-

La crisis catalana resta una décima al PIB

La Airef calcula que la economía española crecería una décima de PIB más este año sin las tensiones políticas en Cataluña. José Luis Escribá, el presidente de la institución, recordó ayer que las previsiones económicas del pasado octubre, en pleno desafío independentista, eran muy preocupantes. Aunque reconoce que la situación económica se ha normalizado, quedan cicatrices. "La economía catalana estaba creciendo en 2017 varias décimas por encima de España. Y eso se ha invertido". Y adelantó: "El crecimiento agregado de la economía española sería una décima superior si Cataluña hubiera crecido como crecía antes (del 1-0)".

dad. No es verdad y con esto al final afectamos a una parte de la población que ya por su edad está inquieta".

Escribá explicó que la salud de la Seguridad Social dependerá de cuestiones como los flujos migratorios, elevar la tasa de actividad o políticas de natalidad. "Simplemente llegando a la tasa de actividad de Alemania, en 20 años, ya corregimos una parte significativa". El presidente de la Airef dejó en evidencia a algunos analistas. "Muchos de esos estudios sobre pensiones no han incorporado las reformas de 2011 que van a tener un impacto a medio plazo de mitigación del efecto sustitución". Y concluyó: "Va a haber presión sobre el gasto en pensiones, sí. Pero cuando uno mira las incertidumbres y mira los márgenes, ves que es suficientemente manejable para no tener que crear una angustia innecesaria en la población".

Crece el rechazo autonómico al plan de Empleo para parados sin ingresos

El ministerio replica que la opción de las comunidades críticas convertiría las ayudas laborales en prestaciones asistenciales

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El Ministerio de Empleo conoció ayer oficialmente el rechazo mayoritario de las administraciones autonómicas a su oferta de reestructuración de las ayudas de último recurso a parados de larga duración. Y es mayor aún del que se preveía al comienzo de la reunión con los responsables de Empleo regionales. No fueron nueve, como le habían anticipado en la reunión preparatoria del lunes, sino 11, según se evidenció ayer en la conferencia sectorial de Empleo, nombre oficial del órgano que agrupa al Ministerio y las 17 consejerías del ramo.

Lo previsto era que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Baleares y Navarra —un colectivo mayoritariamente con gobiernos del

PSOE— rechazaran la oferta que hace Empleo para reestructurar el plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI). En la reunión se sumaron País Vasco y Canarias. Tres fuentes presentes en el encuentro apuntan que en el caso vasco, el rechazo se debe a que reclama la gestión de la nueva ayuda (Renta Complementaria de Desempleo, RED). En el otro, el motivo de la negativa se acerca mucho al de las otras: el diseño presentado por Empleo deja fuera a beneficiarios que con la estructura actual podrían acceder a la RAI.

El pasado septiembre el ministerio y las consejerías de Empleo —también los agentes sociales— se comprometieron a negociar y pactar una reordenación de las tres ayudas para los desemplea-

dos que se encuentran en peor situación (más de un año sin trabajo y sin ingresos). Lo hicieron tras dos sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban ilegales la gestión del Prepara y el PAE por invasión estatal en competencias autonómicas.

Hace unas semanas el Departamento que dirige Fátima Báñez remitió a comunidades, sindicatos y empresarios su propuesta. En ella, se unifican las tres ayudas y en alguno caso se aumenta el periodo que el parado puede cobrar prestación hasta 72 meses.

Desde las comunidades críticas, se rechaza este diseño porque dejaría fuera a parte de los actuales potenciales beneficiarios de la RAI. Esta posición se acerca a la que defienden los sindicatos UGT y CC.OO, que también ven que la oferta ministerial supone

Los sindicatos piden que el subsidio se cobre a los 52 años

No solo las autonomías han formulado una contrapropuesta a la oferta que he hecho el Ministerio de Empleo para reestructurar los parados de larga duración y sin ingresos. También lo han hecho los sindicatos UGT y CC.OO, que en sus alegaciones al proyecto de Empleo combinan las advertencias sobre las lagunas de la propuesta del Gobierno (recortes en la cobertura de la RAI) y sus consecuencias, así como una marcha atrás sobre los recortes de 2012.

Varias de esas rectificaciones serían situar el subsidio para los más mayores a partir de 52 años (ahora está en 55) o, también, subir la base de cotización de estas ayudas en el 125% del SMI (está en el 100%).

un recorte de cobertura. El Ministerio rechaza esta opción. "La amplia la protección", apuntaba ayer una fuente de Empleo.

Justo al acabar la reunión, en la que también se repartieron a las comunidades 2.055 millones para políticas activas de empleo, los responsables autonómicos de Empleo de Andalucía, Extremadura y Baleares todavía salían del encuentro debatiendo, en tono cordial, con el secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo. Este apuntaba que en la contraoferta de las comunidades críticas, con Baleares a la cabeza, hay un problema de competencias y la ayuda tendría un carácter más asistencial que laboral al renovarse cada seis meses sin límite de prórrogas. Riesgo también subrayaba que él pretende llegar a un acuerdo. La otra parte respondía que también ellos lo querían, pero que debía tener contenido y no dejar fuera a los actuales beneficiarios de la RAI: "Esta ayuda no está cuestionada por el Constitucional".

Después de este capítulo, Riesgo respondió a este diario que su intención es sacar adelante esta ayuda a través de un acuerdo. Para llegar a ese punto, todavía hay dos semanas de plazo.